

Libia: la «nueva guerra» por el poder económico

Libya: the “new war” for economic power

Miguel García Guindo

Coordinador del Área de Ciencia Política y de la Administración, Universidad de Jaén. Investigador sénior, Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI). mgguido@ujaen.es

Beatriz Mesa García

Investigadora y doctoranda asociada, Centre Jacques Berque de Rabat (CJB). bmesa_g@yahoo.es

Resumen: El presente artículo aborda el actual escenario libio desde una perspectiva que toma como referencia la importancia de los recursos energéticos como elemento recurrente de la inestabilidad política y configuración estatal libia en su historia más reciente. Para ello afronta, en primer lugar, el debate sobre la importancia de los factores económicos como elemento explicativo de las raíces del conflicto; en segundo lugar, analiza la disposición actual de los distintos centros de poder de acuerdo con el control de las fuentes de riqueza del país; y, para concluir, pone de manifiesto el desafío que plantea la lucha por el control de los hidrocarburos a la consecución de un proceso político.

Palabras clave: Libia, milicias, recursos energéticos, revolución, transiciones políticas, conflictos armados

Abstract: This article addresses the current situation in Libya from a perspective that takes as its reference the importance of energy resources as a recurrent element in the political instability and configuration of the Libyan state in its recent history. For this it deals, first of all, with the debate on the importance of economic factors in explaining the roots of the conflict. Secondly, it analyses the current disposition of the various centres of power in relation to the control of the country's sources of wealth; and, to conclude, it reveals the challenge the fight to control hydrocarbons poses to the achievement of a political process.

Key words: Libya, militias, energy resources, revolution, political transitions, armed conflicts

Introducción: la lucha por el control de los hidrocarburos

La gran mayoría de los análisis llevados a cabo en las últimas décadas, a modo de marco explicativo de los motivos que subyacen tras los levantamientos populares –ya sean movimientos insurrectos, rebeldes o revolucionarios–, se han nutrido principalmente del método histórico a fin de formular hipótesis y generalizaciones de trasfondo ideológico sobre la visión política alternativa en lo referente al tipo de sociedad y estructuras de gobierno que propugnan. Se incluyen aquí las explicaciones de las rebeliones comunistas en el Sureste Asiático, los movimientos de liberación de inspiración marxista en África, así como las insurgencias revolucionarias de América Latina, plasmadas en trabajos como los de Pye (1956), Young (1997), Wickham-Crowley (1992) o Gurr (1970) (García Guindo, 2012: 5-13). Sin embargo, en análisis recientes, guiados en la mayoría de los casos por la aplicación de técnicas estadísticas para la construcción de diseños comparativos entre países, hay un cuerpo creciente de científicos que defienden una postura explicativa de la naturaleza de estos grupos y movimientos, centrada ya no en factores políticos o sociales, sino en motivaciones puramente economicistas. Paul Collier (2000 y 2003), por ejemplo, en la investigación que lleva a cabo sobre la tendencia y estructura global de las guerras civiles desde 1965 hasta mediados de la década de los noventa, concluye que son los factores de índole económica los que nos ayudan a comprender lo que motiva el origen y alienta la existencia de este tipo de conflictos en los que proliferan y se entremezclan actores no estatales de diversa naturaleza. Aquellos factores objetivos que pudieran contribuir a las reclamaciones, agravios u objeciones colectivas que hay tras todo levantamiento –como pudieran ser las fracturas de tipo étnico o religioso o las políticas represivas de la autoridad en el poder– no incrementan el riesgo de conflicto. Serán, como señala Collier, los factores económicos –y los beneficios que se desprenden de estos (oportunismo que genera una economía centrada en el corto plazo, el incremento de la criminalidad, alteración de las pautas habituales del mercado y situaciones de monopolio)–, guiados por la codicia y la depredación de los actores, los que se impongan a aquellos otros que pudieran tener su origen en agravios políticos y/o sociales.

Somos conscientes de que esta influencia creciente de las teorías económicas neoclásicas, centradas en la maximización de los beneficios (económicos) como variable explicativa de las dinámicas de los conflictos, puede resultar excesivamente reduccionista. La aplicación empírica de la lógica neoclásica como representante de la propuesta conductual que guía al *homo economicus* resulta

deficiente y se muestra torpe a la hora de administrar la inevitable necesidad de sortear y pugnar con lo «social» (Cramer, 2002). A su vez, se corre un grave peligro al inferir motivaciones individuales de correlaciones estadísticas. El hecho de que los participantes se sientan atraídos por los beneficios que genera el conflicto no puede ser la disposición central sobre la que se edifica la teoría explicativa del origen de los mismos. Mientras que algunos condicionan su participación a la obtención de beneficios particulares, otros simplemente se ven involucrados por cuestiones de pura supervivencia o están obligados a cooperar bajo prácticas coercitivas (Ballentine y Nitzschke, 2003).

A pesar de ello, la lógica de la hegemonía económica se presenta en el marco de este trabajo como un elemento fundamental de la reconfiguración del mapa de Libia desde la desintegración del régimen de Muammar al-Gaddafi a finales de 2011. Una lógica acompasada, a su vez, por unas instituciones absolutamente degradadas, fruto de la ausencia de élites políticas (tanto conservadoras como liberales) al servicio de los intereses de la colectividad, y por una continua patrimonialización de la violencia por parte de distintos grupos y facciones armadas, que han terminado por sumir al país en un profundo caos. Lejos de los argumentos que enfatizan el desvanecer libio como consecuencia del vacío securitario y el ascenso del extremismo religioso en algunas regiones del país, el futuro democrático de Libia se resiente de manera especial por razones vinculadas al control de los recursos energéticos, origen y consecuencia de luchas intestinales entre las distintas formaciones políticas y sus respectivas milicias¹.

El problema *real* del país magrebí no reside tanto (o en exclusiva) en el ascenso del islamismo o en la incorporación al campo político de las formaciones islamistas sometidas a la represión durante décadas, sino en las rivalidades entre los diferentes centros de poder respaldados por sus respectivas tribus (Ouannes, 2009) y apoyadas sobre una determinada base ideológica²: por una parte, las brigadas de Zintan y Misrata, enfrentadas en el área de la Tripolitania (oeste del país) y, por la otra, las tropas del general Khafter y las milicias de Ansar al Sharia³, que combaten por el control del área de la Cirenaica (este del país). Tal desmantelamiento del poder dificulta el alcance de una solución que genere una

-
1. El enfoque de este artículo no pretende obviar la existencia de factores tanto endógenos como exógenos que han contribuido al estado actual de Libia, sino arrojar una cierta luz sobre un aspecto particular que afecta igualmente al país objeto de estudio. Muchos de los conflictos actuales, que parecen tener su base en rivalidades comunes, tienen una dimensión económica significativa.
 2. Entrevista realizada a Younes Abouyoub, consejero de Libia para Naciones Unidas (Trípoli, 29 de junio de 2014).
 3. En árabe quiere decir «Defensores de la Ley Islámica».

cierta estabilidad en Libia, y ello porque las «nuevas élites políticas», surgidas tras la desintegración del régimen, están invirtiendo todos sus esfuerzos en el control de los recursos energéticos en lugar de garantizar la constitución de un Estado en los términos que dieron origen a la sublevación contra el régimen de Gaddafi. Esta situación regresiva ha generado, sobre todo, desesperanza entre los jóvenes libios, núcleo duro de la Revolución del 17 de Febrero, que nunca imaginaron la deriva hacia una desmedida violencia por el control de los recursos energéticos en un país en el que casi dos, de sus poco más de seis millones habitantes, se han visto forzados a buscar refugio más allá de sus fronteras⁴.

Los centros de poder de Zintan y Misrata (ambos compuestos por un consejo armado y político) se han enfrentado en la región de la Tripolitania por el control de la refinería más importante del país, situada a tan solo 45 kilómetros del aeropuerto de la capital libia. Las primeras batallas entre estas dos facciones enfrentadas estallaron en agosto de 2014, tras la victoria de Zintan (liberal/pro-Gaddafi) en las elecciones legislativas y que le volvieron a colocar como fuerza hegemónica en el Congreso Nacional Libio. Los milicianos de Misrata (conservadores/anti-Gaddafi) no aceptaron el resultado electoral, argumentando «la necesidad de corregir la Revolución del 17 de Febrero que había permitido a los aliados del dictador continuar con buena parte de la explotación de los recursos energéticos sin que esta representara un impacto en la sociedad»⁵. Ese nuevo estallido de violencia permitió a los milicianos de Misrata arrebatarse el poder de Trípoli a los rivales de Zintan, obligados a buscar refugio en la ciudad de Toubrouk, en la frontera con Egipto, donde erigieron un Parlamento paralelo. No deja de resultar paradójico que estos dos actores ahora enfrentados unieran sus fuerzas hace tres años para derribar al coronel Muammar al-Gaddafi; una alianza coyuntural por un objetivo común que, una vez alcanzado, acabó rompiéndose por la divergencia de intereses y fines entre las distintas facciones opositoras al régimen⁶. Así queda, por tanto, el mapa actual de la Tripolitania: por una parte, el centro de poder de

4. La última oleada de combates ha provocado más de 400.000 desplazados internos en Libia, mientras que más de 150.000 libios, incluidos muchos trabajadores migrantes, han abandonado el país. Véase, *Parlament européen* (2015)

5. Entrevista con Omran Ibnaljabal, rebelde libio del frente de Misrata (noviembre de 2014).

6. Es bastante habitual que los nuevos escenarios de conflicto se vean afectados por una enorme fragmentación del poder representada por una poliarquía de actores armados. Son muchos los casos en los que estos grupos cooperan de manera puntual, creando alianzas y frentes comunes, como lo es también que, una vez alcanzado el objetivo que les unió, acaben enzarzados en nuevas luchas intestinales por el reparto de ese mismo poder (García Guindo, 2013: 292).

Misrata, una alianza conservadora compuesta principalmente por las tribus de Misrata, Khom, Zawya y Guaryan, apartadas tradicionalmente del sistema de Muammar al-Gaddafi, circunstancia que las ha privado del reparto de los réditos económicos generados durante los cuarenta años de dictadura; y por otra parte, el centro de poder de Zintan, una alianza liberal formada principalmente por las tribus de Zintan, Tabouss, Beni Walid y Sirte, que han ejercido de valedores del régimen de Gaddafi (Mesa, 2014a).

Parecido escenario nos encontramos en la región de la Cirenaica, donde unidades militares dirigidas por el general Khafter y miembros de la formación islamista Ansar al Sharia compiten por el control de esta región que alberga los puertos petrolíferos más importantes de Libia, en ciudades como Briga, Adjabia o Ras Lanouf. Quien resulte vencedor en la región de la Cirenaica deberá negociar con la fuerza hegemónica en la región de la Tripolitania (en este caso las milicias de Misrata), para después alcanzar pactos (o recurrir nuevamente a la violencia) con el fin de repartirse el territorio sur de Libia, donde hay alrededor de 45 pozos petrolíferos, que se sitúan en las localidades de Jufrah y Marzuq, y que representan una potencial fuente de inestabilidad.

A la narrativa del conflicto, centrada en la rivalidad por el monopolio y control de los hidrocarburos, habría que sumarle el recurso a la ideología como elemento movilizador de la población.

A la narrativa del conflicto, centrada en la rivalidad por el monopolio y control de los hidrocarburos por parte de unas élites políticas y militares como fuente explicativa de la inestabilidad política⁷, habría que sumarle el papel (clave) que podría tener en un momento determinado el recurso a la ideología como elemento movilizador de la población. La fractura social a la que podría llevar la competencia ideológica terminaría por socavar toda esperanza democratizadora. Sin embargo, las alianzas (coyunturales) que conforman el actual escenario libio no han hecho empleo de la ideología a fin de prevalecer sobre sus adversarios. Esto no implica que esta dinámica no se pueda invertir a largo plazo; todo dependerá del desarrollo de los acontecimientos cuando, una vez dilucidada la fuerza o fuerzas vencedoras en este complejo contexto, la cuestión ideológica pueda dar un salto cualitativo y convertirse en un nuevo factor de desestabilización.

7. Debilidad económica y fragilidad política se encuentran entrelazadas, pues, aun en los casos en los que el país sea rico en recursos naturales, la mala gestión y la corrupción de las élites pueden impedir que la explotación de esas riquezas se traduzca en desarrollo social y fortalecimiento de la administración del Estado.

De hecho, en algunas partes del país, los actores han empezado a zarandear banderas de tipo islamista o liberal para ganar influencia y ensanchar sus bases de apoyo social⁸. En la práctica, la ideología es un mero instrumento, porque en Libia, a diferencia de otros países vecinos, existe un claro consenso en el campo político sobre el papel que debe tener el islam: el Corán es la base y la Constitución debe inspirarse en la ley islámica.

En resumen, la inestabilidad política actual en Libia está fuertemente influenciada por la competencia por la atribución de los recursos energéticos. Un factor que, lejos de suponer una ruptura de las dinámicas internas del país, se muestra recurrente es el hecho de que Libia sea señalado como uno de los principales estados rentistas en el mundo (los ingresos del país proceden básicamente de la venta del petróleo); ello no ha favorecido su desarrollo económico y menos aún ha permitido una vocación democrática tal y como atestigua su historia reciente. Tras la asonada militar de Gaddafi y sus aliados en 1969, se dismanteló la configuración de modelo occidental del Estado a favor de un sistema tribal, donde se potenció el poder, en forma de dinero y de armas, de determinadas tribus para apoyar la revolución del conocido *a posteriori* como el «guía de la Yamahiriya». Un sistema asentado en una mezcla ideológica de comunismo, socialismo e islam que, con los años, se transformó en una feroz dictadura (Ross, 2001: 325).

Aproximación histórica a Libia

Golpe militar y hallazgo petrolífero

El uno de septiembre de 1969, el Movimiento de los Oficiales Libres, encabezado por un joven oficial del ejército real de Idris I, llevó a cabo con éxito un golpe de Estado militar que puso fin a la monarquía del Reino Unido de Libia. Es así como Muammar al-Gaddafi, con tan solo 27 años, conseguía adueñarse del poder de un Estado que florecía económicamente y de manera continuada desde que en 1959 se descubrieran gigantescas reservas de petróleo. Pero este

8. En este sentido, la presencia de las interpretaciones más extremistas son ya una realidad. El Estado Islámico (EI) está entrenando a combatientes en Libia y ha establecido una franquiciada en la parte oriental del país. En diciembre de 2014, una milicia del EI ejecutó a 14 soldados del Ejército libio e hizo explotar un coche bomba en Tobruk, donde se celebraba una sesión de la Cámara de Representantes. Por su parte, Al Qaeda en el Magreb Islámico ha establecido centros logísticos en la periferia meridional de Libia. Véase, Parlament européen (2015).

hallazgo, que permitió al país desembarazarse de la rémora de la dependencia del exterior y gozar de una liquidez financiera sin precedentes, supuso a su vez la génesis y origen de una andadura que parece, hoy en día, inserta en la existencia misma del Estado libio (Deeb y Deeb, 1982). Tras la toma del poder, Gaddafi permaneció a la cabeza de la denominada República Árabe de Libia bajo el título de «hermano líder y caudillo de la revolución», al mando del Consejo del Comando Revolucionario, formado por doce de los setenta oficiales golpistas.

La «patrimonialización de la seguridad», unida a la ausencia de instituciones y a un extenso programa de nacionalización de la única actividad industrial del país (la petrolífera) fueron los elementos en torno a los que se construyó un Estado hecho a la medida de Gaddafi y sus partidarios (Burgat, 2003)⁹. Sin embargo, el régimen tenía aún que hacer frente al mayor escollo para el afianzamiento de su autoridad: la falta de estructuración del Estado. El predominio de la autoridad tradicional suponía una traba insalvable para la creación de una organización estatal eficiente. Con el objetivo de sortear tal obstáculo y su fuerte arraigo en afiliaciones tribales, el régimen puso en marcha en 1973 la denominada «Revolución Cultural y Popular».

Los Comités Revolucionarios y nacionalización del petróleo

El líder libio creó hasta 2.000 Comités del Pueblo a lo largo y ancho del país. Auspiciados como los nuevos órganos del Gobierno, muchos dirigentes fueron animados a asegurar su parcela de poder a través de una especie de membresía, guiados por el concepto gaddafiano de la «democracia directa» que aparecería por primera vez en 1975, coincidiendo con la publicación del *Libro verde*¹⁰. Los Comités del Pueblo cosecharon un éxito rotundo y pasaron a ser los responsables del Gobierno y la Administración bajo la supervisión de una autoridad central, el Congreso General del Pueblo, que sustituyó al Consejo del Comando Revolucionario. La fidelidad de estos comités al régimen de la *Yamihiria* se garantizaba a su vez confiriéndoles altas cuotas de libertad; así, no tardó en revelarse como un régimen dictatorial, sorprendentemente estable, pero con pies de

9. El asalto a las áureas fuentes de financiación del Estado no tardó en llegar. Después de la triplicación del precio del barril en 1971, el régimen emprendió una campaña de nacionalización de las empresas petrolíferas que le llevó a poseer nada más y nada menos que el 60% de la producción en 1974.

10. El *Libro verde*, constituido por tres volúmenes, sirvió de Constitución para el pueblo libio. En él se recogía el pensamiento político del sistema impuesto por Muammar al-Gaddafi: una amalgama entre socialismo, islamismo y nacionalismo árabe.

barro. Los Comités Revolucionarios, creados en 1977 y encargados de «supervisar y asegurar el poder del pueblo», actuaron como instrumentos de represión política. El Estado libio se atribuía el deber de mantener a sus ciudadanos, y estos el derecho a ser mantenidos por aquel. Una dictadura atípica, con uno de los índices de democracia más bajos del continente africano, que gozaba, no obstante, del mayor índice de desarrollo humano (IDH) de África y del mundo árabe¹¹. En 2010, un año antes del inicio de la guerra civil, Libia ocupaba el puesto 53 de los 163 países analizados en el IDH¹². A pesar de ello, la tasa de paro alcanzaba el 20,74% y un 16% de las familias no disponía de ingresos de ningún tipo (Gutiérrez de Terán y Álvarez-Ossorio, 2011).

Ya en la etapa de los años noventa del siglo pasado, el régimen empezó a enfrentarse a serias dificultades fruto del bloqueo al que fue sometido el país por la comunidad internacional que acusó al Gobierno libio de estar implicado

Cuando el régimen de Gaddafi por fin logró salir del atolladero internacional al que sus aspiraciones lo habían llevado, los elementos detonadores de la revolución de febrero de 2011 estaban en plena efervescencia.

en diversos atentados contra objetivos occidentales. Esta situación duró casi dos décadas, hasta que en 2006 Estados Unidos eliminó a Libia de la lista de países patrocinadores del terrorismo, después de que este reconociera que había organizado opera-

ciones terroristas y decidiera indemnizar a las víctimas (Burgat, 2003). Visto en retrospectiva, este período temporal ofrece valiosas claves del colapso que darían origen a las revueltas populares de 2011: más de una veintena de liquidaciones físicas de disidentes refugiados en el extranjero; la represión a través de los Comités Revolucionarios; la mordaza a la prensa; la aprobación de las «leyes de purificación» en 1994, que introdujeron castigos físicos tales como amputaciones y flagelaciones. Todo ello colaboró de manera decisiva al aumento de una opresión que se fue ampliando a cada vez más sectores de población. Cuando el régimen de Gaddafi por fin logró salir del atolladero al que sus aspiraciones internacionalistas y su carácter autocrático lo habían llevado, los elementos detonadores de la revolución de febrero de 2011 estaban en plena efervescencia, a un punto en el que cualquier chispa era susceptible de inflamar el país.

11. Véase Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)-Libia (2 de noviembre de 2014) (en línea) <http://www.ly.undp.org/content/libya/en/home/countryinfo/>

12. El IDH distingue entre países de «desarrollo humano muy alto», «desarrollo humano alto», «desarrollo humano medio», «desarrollo humano bajo» y «otros países y territorios». Atendiendo a esta clasificación, Libia se situaba en 2010 en la horquilla de países comprendidos en la categoría de países con «desarrollo humano alto» (PNUD, 2010).

De la República asamblearia a milicias armadas

Si durante el régimen de Muammar al-Gaddafi la piedra angular del sistema eran los Comités Revolucionarios y las Comisiones Populares, tras el estallido de la Revolución del 17 de Febrero de 2011, toda esta estructura que encarnaba el poder directo de las masas desapareció y fue reemplazada por una red de brigadas, milicias y sus respectivas fuerzas políticas (Martínez, 2014) que, a día de hoy, detentan un poder forjado gracias al control de unas áreas ricas en petróleo y gas, y al amparo armamentístico. La complejidad del actual escenario en Libia dificulta una explicación pormenorizada de cuáles son esas áreas y en manos de qué grupos se encuentran. A pesar de ello, se puede establecer una categorización de los distintos actores surgidos al calor del conflicto libio que, si no pretende ser excluyente ni la mejor fundada, refleja a nuestro entender de manera acertada la heterogeneidad del campo político-armado libio. Podemos diferenciar cuatro grandes grupos¹³:

- *Las brigadas rebeldes*: emergieron en las ciudades de Zintan y Misrata durante la guerra de Libia, y son considerados los guardianes de la Revolución. La base de su fuerza está compuesta por estudiantes, además de trabajadores del sector privado y público. Se estima que cuenta con unos 40.000 efectivos.
- *Las brigadas no organizadas*: trabajan de forma independiente, es decir, desvinculadas del Estado. Los dirigentes militares de estas brigadas aseguran que en marzo de 2012 había entre seis y nueve batallones no organizados en Misrata, que representaban en torno a un 4% del total de los grupos armados en la ciudad. En la actualidad, los batallones siguen intactos. Al igual que los otros grupos, han recibido formación militar, responden a una estructura bien organizada y cuentan con capacidades militares. Sin embargo, los líderes de estas estructuras han preferido desvincularse de los consejos locales y militares¹⁴, y han renunciado así a una cierta legitimidad. Estos grupos anteponen su lealtad a los *suyos*, a las tribus y comunidades de las que son originarios.
- *Las brigadas del período posrevolución*: destaca la Libyan Shield Force, que se crea en 2012 como vehículo integrador de distintas milicias (tanto federalistas como

13. Esta categorización es fruto del trabajo de investigación llevado a cabo por uno de los autores de este artículo. Los resultados obtenidos son producto del análisis y síntesis de las entrevistas mantenidas con rebeldes del 17 de Febrero en Libia, Marruecos y España durante los años 2013 y 2014.

14. Los consejos militares locales surgen en paralelo a la Coalición del 17 de Febrero. Encargados de defender al pueblo y territorio de Libia, se convirtieron en los gobiernos locales de facto.

islamistas) en la fuerza nacional. Sin embargo, y a pesar de contar con el respaldo y el apoyo financiero institucional, la distancia entre esta y el Gobierno es cada vez más evidente, principalmente por la defensa de la Libyan Shield Force de una revolución por medio de la violencia, así como por las tensiones generadas con otras fuerzas (patrocinadas también por el Gobierno), tales como Al-Saiq (fuerza de élite formada por tropas paramilitares) y el Ejército libio. Está compuesta por cuatro brigadas y tienen presencia principalmente en los tradicionales bastiones de Gaddafi, así como Trípoli, Bani Walid o Sirte.

- *Las milicias*: este campo es igualmente complejo y vasto. Al amparo de la revolución, surgieron milicias que luego se han multiplicado por iniciativa propia de los gobiernos de transición posteriores a la caída del régimen. El ejemplo más representativo es la milicia Mártires del 17 de Febrero, que es la más grande y más extendida en la zona oriental (Cirenaica). Esta milicia, financiada por el Ministerio de Defensa, está integrada por unos 3.000 combatientes y cuenta con armas ligeras y pesadas, además de bases para su entrenamiento. Tiene la misión fundamental de garantizar la seguridad en la región, así como alcanzar cierto orden no solo en el este de Libia, sino también en poblaciones sureñas como Koufra. La milicia de los mártires de Raf Allah Assahti, una escisión de los Mártires del 17 de Febrero, cuenta con unos 10.000 combatientes desplegados en el este de Libia y en Koufra. Su nombre rinde homenaje al primer mártir que cayó muerto durante los combates contra las fuerzas de Gaddafi en marzo de 2011 en la ciudad de Bengazi. El Grupo Islámico Combatiente Libio se creó mucho antes del inicio de las revueltas populares. Su origen se remonta a la década de los noventa y nació con el objetivo de derrocar el régimen de Gaddafi e instaurar un Estado islámico en Libia. De inspiración ideológica yihadista, se estima que cuenta con unos 400 miembros desplegados principalmente en el este y oeste del país¹⁵. La Jamaa salafiya (grupo salafista) está desplegada en la región oeste de Trípoli, así como Banlieu, Zaouia, Misrata, Khoms y Zliten, y controla numerosas mezquitas de estas ciudades con el fin último de propagar su discurso. Este grupo, que no responde con exactitud a una estructura u organización, rechazó sublevarse durante la revolución, fun-

15. Este grupo fue incluido en la lista (6 de octubre de 2001) establecida y mantenida por el Comité del Consejo de Seguridad de la ONU en virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) con respecto a personas, grupos, empresas y entidades asociados con Al Qaeda. Véase el listado actualizado de esta lista a 2 de enero de 2015: <http://www.un.org/sc/committees/1267/pdf/AQList.pdf>

damentando su posición en un principio de la ideología salafista¹⁶. Tras la caída de Gaddafi, esta facción se sumó al juego político bajo la agrupación política de Assala wa Tajdid («autenticidad e innovación»). La victoria del islam político en otros países con parecido proceso de transición política (tras la sublevación de sus pueblos contra los regímenes dictatoriales) hizo pensar a esta recién creada formación en un posible triunfo en Libia. Sin embargo, y a pesar del marcado carácter conservador en cuando al proyecto de sociedad del pueblo libio, los comicios electorales otorgaron una amplia victoria a los liberales. Tras los resultados, los islamistas dieron un giro a su discurso a fin de garantizar su presencia en las instituciones de Gobierno independientemente de su orientación ideológica.

La pugna político-militar de los actores

La etapa posterior a la disolución del régimen de Gaddafi se ha caracterizado por el protagonismo y proliferación de armas y grupos armados que se han multiplicado de manera exponencial a lo largo y ancho de Libia. La nueva élite política del Gobierno incipiente dibujó una estrategia basada en la creación de «instituciones milicianas» próximas a un núcleo de poder determinado que debía garantizar su protección a cambio de la cual serían recompensadas. Así las cosas, los llamados miembros del «clan Gaddafi» o secularistas, tales como Mahmoud Jibril, Ali Tarhouni o Abdel Rahmán Shalgam¹⁷, entre otros, que ocupaban la mayoría de los escaños del Consejo Nacional Libio tras la asombrosa victoria de su formación política en las legislativas de 2012, organizaron en torno a sus élites, grupos de combatientes con un doble objetivo: garantizar su seguridad y salvaguardar los pozos y puertos petrolíferos bajo su control¹⁸.

16. Dentro del movimiento salafista, existe una corriente denominada «quietista», que defiende el principio de respeto a la autoridad, siempre y cuando sea islámica, por lo que no existe posibilidad *moral* de confrontarla.

17. Jibril ha sido un hombre muy influyente en el campo político libio. De ideología liberal y miembro de la tribu Warfalla, de Bani Walid (próxima al régimen de Gaddafi), Jibril es considerado como uno de los halcones del exdictador. Tanto él como el resto de sus colaboradores –Ali Tarhouni (responsable del expediente del petróleo) y Abdel Rahmán (exministro de exteriores)– despertaban una hostilidad manifiesta en el conjunto de la sociedad libia, ya que muchos de ellos colaboraron con Gaddafi antes de dar el salto a la oposición tras la Revolución del 17 de Febrero.

18. Según fuentes milicianas consultadas por uno de los autores durante el desarrollo del trabajo de campo en las ciudades de Misrata y Trípoli, en el mes de junio de 2014.

En todo momento, se obvió la construcción de unas primeras bases que promovieran una cultura democrática o la creación de instituciones capaces de convertir Libia en un Estado en sentido estricto. En su lugar, aquellos que detentaban el poder se dedicaron a compensar económicamente a los combatientes por su esfuerzo en la guerra contra Gaddafi y a dividirlos en milicias, otorgándoles parcelas de responsabilidad cuyo ejercicio obedecía poco o nada a los intereses y demandas de la sociedad en general. En lugar de animar a estas formaciones a abandonar las armas para después impulsar un proceso de transición pacífico, se potenció la integración de los rebeldes en *katibas*, repitiendo así el mismo modelo heredado por Gaddafi de «divide y vencerás». Un modelo en el que ninguna de las facciones renuncia a imponer su propia hegemonía política, atribuyéndose potestades de mando en un país desmantelado, carente de leyes y de orden.

La red de alianzas entre islamitas, liberales, tribus y civiles se diversificó en múltiples nodos que conformaban una telaraña casi indescriptible. Y ello también porque a la caída de Gaddafi le sucedió un desmantelamiento del poder que se fragmentó, regresando a manos de unas organizaciones armadas, renuentes a despojarse del recurso a la violencia en un momento tan decisivo como era el de la transferencia del poder al conjunto de normas marcadas por los nuevos *decisores*. Tres años después, Libia continúa en ese *impasse*, y se enfrenta a un juego de alianzas en el que las distintas facciones compiten entre ellas y dentro de ellas. De hecho, este contexto responde al esquema de la sociología de poder, que distingue entre las relaciones circulares que se dan entre las élites para mejorar su posición relativa en el sistema y las relaciones lineales que caracterizan a los movimientos populares armados que acaban alcanzando alianzas con sectores de la élite (Izquierdo, 2008). La Libia posttotalitaria se enmarca en el segundo planteamiento de la negociación entre los rebeldes armados y los actores políticos. La interdependencia es cada vez más exigente, porque el monopolio del capital económico libio depende del peso de la fuerza política que se mide basándose en el número de combatientes que la protege. Las rentas del petróleo y del gas se juegan en un escenario donde compiten élites rebeldes y élites políticas que interactúan constantemente por el control del país. De ahí que las mayores afrentas se estén acometiendo entre las brigadas vencedoras en la guerra de Libia que surgieron en Misrata¹⁹ y las brigadas de Zintan, que impusieron su hegemonía política en la Tripolitania con el respaldo de los votos obtenidos de las primeras elecciones democráticas tras cuarenta años de dictadura.

19. Misrata también es conocida como la ciudad mártir, tras el asedio al que fue sometida por las tropas de Gaddafi durante tres meses en 2011 y en el que perdieron la vida cerca de 2.000 miembros del Frente de Misrata.

Este esquema no se antoja categórico teniendo en cuenta el contexto coyuntural en el que se producen estas alianzas, a veces por conveniencia (casi siempre) y, en menor medida, por convicciones ideológicas. El tratamiento de las dimensiones política y, sobre todo, económica requiere de un cambio de paradigma que lleve a los actores (tanto a los que pertenecieron al aparato de Gaddafi como a los opositores que derrocaron el régimen) a sentarse a negociar. Se hace imprescindible para ello una ronda de contactos entre los diferentes líderes libios a fin de diseñar un futuro desde una óptica que contemple la repartición equitativa de las propiedades del país. Superada esta prueba, la formación de instituciones democráticas dejaría de ser baladí.

La milicia y la dependencia del Estado

Toda formación política o todo candidato independiente en Libia requiere del respaldo (entre bastidores) de al menos un grupo armado. Esto explica la necesidad de las primeras de dominar y controlar las rentas derivadas de la explotación de los hidrocarburos, con el objeto de atraer y recabar apoyos entre los mandos de estas facciones armadas (Gallies de Salies, 2009). La supervivencia de la fuerza política se condiciona al respaldo de un grupo o varios grupos milicianos, pero también representa la *estabilidad* del propio combatiente, puesto que su adscripción a una estructura miliciana significa una salida profesional y una comodidad vital²⁰. En la actualidad, existen más de 400.000 milicianos que, al amparo de distintas facciones, se reparten el control de zonas estratégicas como aeropuertos o bases petrolíferas y gasísticas. A este bucle, habría que sumarle el cordón umbilical que une a todo combatiente, sin excepción, a un Estado del cual perciben un salario de entre 500 y 2.500 euros mensuales²¹.

En estos términos se asentó también el régimen de Gaddafi, que basó todo un sistema en las rentas de los hidrocarburos obviando la creación de otro tipo de industrias a modo de nichos de mercado alternativos. Todo el tejido productivo se conformó en torno a unos recursos naturales. Gaddafi, tras su asalto al poder, fomentó una cultura del trabajo basada en la dependencia de la Administración

20. Lo que incita o subyace tras la unión de muchos individuos a una milicia o grupo armado, más allá de una visión ideológica o religiosa compartida, de un sentimiento generalizado de injusticia social, etc., es una cuestión de pura supervivencia.

21. Este dato se extrae de los comentarios de numerosos rebeldes del centro de poder de Misrata en entrevistas llevadas a cabo durante el mes de julio de 2014. Para más información sobre este particular, véase Mesa (2014a).

(y de la que sigue dependiendo el conjunto de la población Libia) y que se sufragaba a través de los ingresos derivados de la explotación de los recursos energéticos. Esta cultura del trabajo sigue presente en buena parte del país, salvo en Misrata, donde se aprecia una voluntad de reconducir Libia hacia un sistema de industrialización que impulse la empresa privada y motive a los libios a formar parte de un desarrollo económico que vaya más allá de las empresas creadas en torno a la explotación de hidrocarburos²². Los empresarios de Misrata, una élite influyente en la región que financió la revolución y contribuyó a la victoria del 17 de febrero, consideran imperativa la puesta en marcha de políticas que rompan con estas dinámicas asentadas en un sistema de dependencias (entre el Estado y el ciudadano y entre este y la economía de guerra) que se retroalimentan y favorecen el proceso de desintegración estatal. En este tipo de escenarios, es habitual que los distintos grupos armados recurran a prácticas económicas irregulares como el saqueo, la extorsión, el secuestro, la explotación y comercio de materias primas, el robo y redistribución de ayuda humanitaria, etc. De este modo, la naturaleza política de la guerra se combina con el crimen organizado y con el empleo de la violencia con fines particulares, y en algunos casos se ve en gran medida suplantada por estos últimos (Kaldor, 2001: 90-91). Estos sistemas de financiación tienden a prolongar el conflicto, pues además de devastar el país proporcionan autonomía financiera a los actores armados no estatales.

Conclusiones

El futuro de Libia está sembrado de incertidumbres por la difícil resolución de un conflicto armado, en un territorio fuertemente fraccionado por actores más preocupados por el control de las principales fuentes de riqueza del país que por la extensión y fortalecimiento de la democracia y la gobernanza. Los focos bélicos actuales, en el este (Cirenaica) y oeste del país (Tripolitania), y con una presumible extensión al sur (Fezzan), parece que solo se apagarán mediante la imposición de la fuerza armamentística de una de las partes. Una solución cortoplacista que a buen seguro dejará un legado de fisuras, divisiones y odios irreconciliables que antes o después volverán a aflorar.

22. Entrevista realizada en julio de 2014 a Mohamed Raied, un influyente hombre de negocios de la ciudad de Misrata que financió durante los meses de la contienda de 2011 los barcos de ayuda humanitaria y asistencia sanitaria destinados a los rebeldes.

No cabe duda de que la solución al conflicto debe partir de la propia Libia y de un consenso político al que le preceda un proceso de diálogo en el que intervengan todos los actores sin excepción, incluidos los integrantes del movimiento Ansar al Sharia. En este sentido, los milicianos de Misrata, que actualmente dominan la región de la Tripolitania, han mostrado su repulsa a las señales enviadas desde Occidente en las que se percibe la predilección de un actor en detrimento de otro. El señalamiento de Ansar al Sharia como enemigo y del general Khafter como válido interlocutor ilustran los deseos, por parte de las grandes potencias, de buscar apoyos entre aquellos próximos a su ideario con el fin de proteger sus intereses energéticos en Libia. Un ejemplo de lo dicho lo encontramos en la visita, en noviembre de 2014, del enviado especial de Naciones Unidas para Libia, Bernardino León, que se reunió tan solo con miembros del centro de poder de Zintan en Tobruk, a pesar de que el Tribunal Supremo libio había declarado tan solo unos días antes la inconstitucionalidad del Parlamento libio confinado en esta ciudad, y se mostró a su vez remiso a mantener conversaciones con miembros del otro Parlamento con sede en Trípoli, bajo control de la fuerza de Misrata²³. Los milicianos de Misrata estiman que sus rivales del clan de Zintan, en connivencia con Occidente, buscan una intervención exterior que justificarían por la deriva yihadista del país, pero con el objetivo encubierto de mantener el monopolio sobre las riquezas.

Para evitar un escenario como este, se impone, por un lado, la necesidad de un acuerdo que garantice una distribución organizada y equitativa de los recursos energéticos de Libia, y por el otro, establecer una hoja de ruta entre todas las formaciones políticas (sin excepción) para la creación de un Gobierno de unidad nacional. Este último aspecto resulta a su vez esencial de cara al desarrollo de un verdadero proceso de desarme, desmovilización y reintegración de las incontables milicias que cohabitan en el actual escenario libio. Todo esfuerzo en este sentido (en términos de seguridad y estabilidad) contribuirá de manera definitiva a la recuperación y desarrollo de un proceso político pacífico.

23. Extracto de la entrevista mantenida con un miembro de Naciones Unidas en noviembre de 2014. La fuente prefiere conservar el anonimato.

Referencias bibliográficas

- Ballentine, Karen y Nitzschke, Heiko. «Beyond Greed and Grievance: Policy Lessons from Studies in the Political Economy of Armed Conflict». *International Peace Academy Policy Report* (octubre de 2003).
- Burgat, François y Laronde, André. *La Libye*. París: PUF (colección «Que sais-je ?»), 3ª edición, 2003.
- Collier, Paul. «Rebellion as a Quasi-Criminal Activity». *Journal of Conflict Resolution*, vol. 44, n.º 6 (2000), p. 839-853.
- Collier, Paul. «The Market for Civil War». *Foreign Policy* (2 de noviembre de 2003), p. 38-45.
- Cramer, Christopher. «Homo Economicus Goes to War: Methodological Individualism, Rational Choice and the Political Economy of War». *World Development*, vol. 30, n.º 11 (2002), p. 1.845-1.864.
- Deeb, Marius y Deeb, Mary. *Libya since the revolution: aspect of social and political development*. Nueva York: Greenwood Pub Group Inc., 1982.
- Gallies de Salies, Bruno. «Réformes et guerre de succession dans la Jamahiriya». *Confluences Méditerranée*, n.º 71 (2009).
- García Guindo, Miguel. *La consolidación de los movimientos insurgentes: Al Qaeda en Irak*. Granada: Universidad de Granada, 2012.
- García Guindo, Miguel. «Insurgencia y Contrainsurgencia», en: Jordán, Javier (coord.). *Manual de Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional*. Madrid: Plaza y Valdés, 2013, p. 287-307.
- Gutiérrez de Terán, Ignacio y Álvarez-Ossorio, Ignacio. *Informe sobre las revueltas árabes*. Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2011.
- Gurr, Ted. *Why Men Rebel*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1970.
- Izquierdo, Ferrán. *Poder y felicidad*. Barcelona: Los libros de la catarata, 2008.
- Kaldor, Mary. *Las nuevas guerras: la violencia organizada en la era global*. Barcelona: Tusquets, 2001.
- Long, Austin. *On the other war: lessons from five decades of RAND Counterinsurgency Research*. Santa Monica: Rand Corporation, 2006.
- Martínez, Luis. «Libya from Paramilitary Forces to Militias: The Difficulty of Constructing a State Security Apparatus». *Policy Alternatives* (mayo de 2014) (en línea) <http://www.arab-reform.net/sites/default/files/Martinez%20-%20formatted%20-%20May%207.pdf>
- Mesa, Beatriz. «Libia: La lucha por los recursos». *Documento Opinión*, n.º 147 (19 diciembre de 2014a). Instituto Español de Estudios Estratégicos (en línea) http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2014/DIEEO147-2014_PoderEconomico_Libia_BeatrizMesa.pdf

- Mesa, Beatriz. «¿Quién controla Libia?». *Esglobal* (30 de julio de 2014b) (en línea) <http://www.esglobal.org/quien-controla-libia/>
- Ouannes, Moncef. *Militaires, élites et modernisations dans la Libye contemporaine*. París: L'Harmattan, 2009, p. 220-240.
- Parlament européen. « Résolution sur la situation en Libye » (15 de enero de 2015) (en línea) <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0010>
- PNUD-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. *Informe sobre Desarrollo Humano 2010* (2010) (en línea) [fecha de consulta 15 de noviembre de 2014] http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2010_es_summary.pdf
- Pye, Lucian W. *Guerrilla Communism in Malaya: Its Social and Political Meaning*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1956.
- Ross, Michael L. «Does oil hinder democracy». *World politics*, n.º 53 (2001).
- Senlis Council. *Countering the insurgency in Afghanistan: losing friends and making enemies*. Londres: MF Publishing LTD, 2007.
- Wickham-Crowley, Timothy P. *Guerrillas and Revolution in Latin America: A Comparative Study of Insurgents and Regimes Since 1956*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1992.
- Young, John. *Peasant Revolution in Ethiopia: The Tigray People's Liberation Front, 1975–1991*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.